

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 30 º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-1488-2022  
CARATULADO : SANGUINETTI/FISCO (CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO)

Santiago, dieciocho de Julio de dos mil veinticuatro

**VISTOS:**

Con fecha 27 de febrero de 2022, comparece el abogado don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, en representación de representación de doña **Katrina Bárbara Sanguinetti Tachibana**; don **Hajime Giorgio Sanguinetti Tachibana**; don **Gino Américo Sanguinetti Tachibana**; doña **Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana**; doña **Jocelyne Roxana Sanguinetti Tachibana**; doña **Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti**; doña **Zsu Ramírez Sanguinetti**; doña **Nicole Pastene Sanguinetti**; don **Carlo Filippo Pastene Sanguinetti**, quien actúa representado por su madre doña **Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana**; don **Aldo Bautista Pastene Sanguinetti**; doña **Michella Chargoña Sanguinetti**; doña **Carla Francisca Sanguinetti Carvajal**; doña **Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal**, representada por doña **Robertina de Las Mercedes Carvajal Eyzaguirre**; don **Diego Eduardo Sanguinetti Pizzaro**; don **Gianluca Sanguinetti Vivar**, representado por don **Hajime Giorgio Sanguinetti Tachibana**, y por doña **Valeska del Pilar Vivar Morales**; y de doña **Cuzia Alegra Sanguinetti Paine**, representada por don **Gino Américo Sanguinetti Tachibana**, y por doña **Elizabeth Mariolle Paine Fierro**, todos domiciliados en en Pasaje Doctor Sótero del Río N°326, oficina 1104, comuna de Santiago, quienes deducen demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del



Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliado en Agustinas 1225, piso 4, Santiago, comuna y ciudad de Santiago.

Indica que las demandantes doña Katrina Bárbara, don Hajime Giorgio, don Gino Américo, doña Maritza Eleonora y doña Jocelyne Roxana, todos de apellidos Sanguinetti Tachibana, son hijas e hijos de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

Por su parte, continúa, las demandantes doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti, doña Zsu Ramírez Sanguinetti, doña Nicole Pastene Sanguinetti, don Carlo Filippo Pastene Sanguinetti, don Aldo Bautista Pastene Sanguinetti, doña Michella Chargoña Sanguinetti, doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal, doña Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal, don Diego Eduardo Sanguinetti Pizarro, don Gianluca Sanguinetti Vivar y doña Cuzia Alegria Sanguinetti Paine, son nietas y nietos de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

Expone que don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida es una víctima de violaciones a sus derechos humanos, según lo estableció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida como "Comisión Rettig", en su Informe evacuado en el año 1991.

Sobre el hecho represivo que, específicamente, afectó a don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, expone que la referida Comisión de Verdad señaló en su informe:

*"Dos días después, el 14 de septiembre de 1973, Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, 38 años, Jefe del Departamento de Investigaciones de Aduanas, Profesor universitario y militante del Partido Socialista, murió a bordo del carguero Maipo. Se ha acreditado ante esta Comisión que habiéndose presentado voluntariamente el día 12 de septiembre a la autoridad naval, en dependencias de la Aduana, fue detenido en el acto y trasladado al Maipo, donde se le mantuvo recluido en una de sus bodegas. Desde allí fue sacado en diversas oportunidades para ser interrogado y sometido a torturas en el Buque Escuela Esmeralda. Según una versión, según otra, en el transporte*



*Maipo y en la Gobernación Marítima. Los antecedentes reunidos por esta Comisión confirman el hecho de que los malos tratos a que fue sometido lo dejaron en deplorables condiciones físicas y psicológicas. Testigos presenciales de su muerte relataron que ese día fue torturado en el Maipo, llevado a la Gobernación Marítima, nuevamente torturado y de allí devuelto al Maipo. Compelido al día siguiente a circular por la cubierta y no pudiendo cumplir la orden, por el lamentable estado en que se encontraba, se lanzó en un raptó de desesperación a una bodega del barco, falleciendo instantemente. Otra versión dice que la tortura fue en el Esmeralda.*

*La Comisión se formó así la convicción que Luis Enrique Sanguinetti es una víctima de agentes del Estado, por cuanto su muerte tiene como antecedente directo e inmediato el trato cruel y degradante al que fue sometido”.*

Hace presente que los hechos criminales que afectaron a don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida están siendo, actualmente, indagados por el señor Ministro en Visita Extraordinaria don Max Cancino Cancino, de la Illma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa rol Nº 144.064-2011, causa que se encuentra en etapa de sumario, con un sujeto procesado y con diligencias pendientes.

Comenta que por decisión de 19 de mayo de 2014, el entonces señor Ministro en Visita Extraordinaria don Jaime Arancibia Pinto, de la Illma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, sometió a proceso a Ricardo Monje Mohr, como autor de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos perpetrados en perjuicio de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida. En el mencionado procesamiento, según consta en su basamento segundo, se tuvo por justificada la existencia de los siguientes hechos criminales, constitutivos de los delitos antes referidos:

*“(…) Que, el 12 de Septiembre de 1973 en circunstancias que Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, se desempeñaba como Jefe del*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXDXDQVXW

*Departamento de Investigaciones del Servicio de Aduanas en Valparaíso, se presentó en horas de la mañana en la Superintendencia de Aduanas de este puerto, junto a su hija para hacer entrega de las armas que conforme al estatuto de su departamento le permitía poseer. Ya en la puerta de dicho recinto, imprevistamente un funcionario de la Armada que estaba en ese lugar le puso sus manos en la nuca y lo sacó de la fila en que se encontraba, para conducirlo al cuarto piso donde fue interrogado. Al medio día, fue sacado de la Aduana esposado, custodiado por marinos y conducido al Buque Maipo, en donde fue detenido y encerrado, no existiendo orden judicial alguna que justificara dicho estado y siendo objeto de torturas durante su encierro hasta el día 14 de Septiembre de 1973, lo que ha sido constatado de acuerdo a la autopsia ya referida, oportunidad en que, producto de las mismas, se lanzó de espaldas al vacío, desde la cubierta hacia una de las bodegas del referido Buque, lo que le provocó la muerte”.*

Afirma que los hechos criminales antes detallados, cometidos en perjuicio de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, han causado un enorme daño a las personas demandantes, hijas e hijos, nietas y nietos, de la víctima antes individualizada. Sobre dicha experiencia represiva vivida y el daño sufrido, sus representadas y representados han expresado los siguientes relatos:

1. Relato de doña Katrina Bárbara Sanguinetti Tachibana, hija de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Indica que al momento del Golpe de Estado, su padre tenía 38 años y ella 17, y era la mayor de cinco hermanos. Acompañó a su padre a la Aduana, donde fue separado de él por un marino armado, siendo esa la última vez que lo vio vivo.

Afirma que en ella habitó por mucho tiempo la pena, la rabia y por sobre todo el miedo, desasosiego, ansiedad que la han acompañado hasta hoy.



Como militante socialista, enfrentó sanciones y discriminación durante la dictadura, lo que la llevó a emigrar a Argentina. A pesar de las adversidades, regresó a Chile, donde continuó sus estudios, formó una familia y se unió al Partido Socialista clandestino en 1983. Ha enfrentado graves problemas de salud mental, incluyendo estrés postraumático por recuerdos trágicos permanentes, pero ha logrado mantenerse unida con sus hermanos y demostrar resiliencia ante las dificultades.

2.- Relato de don Hajime Giorgio Sanguinetti Tachibana, hijo de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Manifiesta que el hecho criminal que afectó a su padre sucedió cuando estaba en plena adolescencia, en ese momento de la vida en que suceden muchos cambios a nivel fisiológico y mental, pudiendo indicar que en innumerables ocasiones necesitó de un padre orientador y amigo, con el cual conversar todas las cosas de hombre.

Señala que acompañó a su madre a identificar el cuerpo de su padre, quien presentaba múltiples heridas y laceraciones en su cuerpo, dejándole una imagen que aún no ha podido borrar.

Después del suceso, hace presente que enfrentaron un fuerte impacto familiar y social, con recurrentes advertencias de mantenerse en silencio debido a estar en "lista negra".

Afirma que su familia se separó: su madre con los más chicos se fue a vivir a otra casa y su hermana mayor se fue a vivir a Argentina, quedando el solo en la casa familiar con tan solo 15 años.

Comenta que fue hostigado en el colegio y sufrió detenciones y maltratos por parte de las autoridades.

Expresa que su sentir actual es el dolor que aún no haya justicia para un acto tan deleznable como el abuso de poder por parte de agentes del Estado, que terminaron con la vida de su padre y el abuelo de sus hijas.



3.- Relato de don Gino Américo Sanguinetti Tachibana, hijo de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Indica que no ha habido ni habrá un momento en donde hablar del deceso de su padre no traiga un sentimiento de angustia, impotencia e injusticia.

Expresa los momentos turbulentos vividos por él y su familia durante el Golpe de Estado en Chile en 1973 y las consecuencias posteriores. Destaca las amenazas de muerte recibidas, la confusión y el miedo durante el golpe, la pérdida de su padre, la dificultad para encontrar su cuerpo, y la persecución política que enfrentaron después del golpe. Comenta que su madre tuvo que reinventarse y enfrentar la persecución en la universidad, además menciona que se involucró en protestas y enfrentó la represión.

4.- Relato de doña Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana, hija de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Señala que la orfandad parental le causó una tremenda pena y desazón incontrolada. Tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos y solo pensaba en que su vida había sido marcada.

Describe que la familia quedó desorganizada ante la angustia, la impotencia y la rabia. El miedo se instaló en su vida y se impregnó en todo su proyecto de vida.

Destaca cómo la represión política y la persecución afectaron su vida laboral y la de su madre, quienes enfrentaron hostilidad en el ambiente universitario y amenazas constantes de pérdida de empleo. Además, señala las dificultades económicas que enfrentaron tras la cesación de trabajo de su madre como docente en la Universidad de Chile en Valparaíso.

5.- Relato de doña Jocelyne Roxana Sanguinetti Tachibana, hija de la



víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Manifiesta que era la menor de los cinco hermanos y tenía 9 años al momento de los hechos.

Creció con un temor extremo de hablar, de decir quién era, vivió siempre con miedo y su familia feliz desapareció de repente.

Indica que los años que vinieron a la muerte de su padre fueron oscuros, insertos en una sociedad que los estigmatizaba. Fueron discriminados, quedaron sin protección, sin amigos, en silencio y con una pena infinita. Cada uno de ellos, a su manera y sin apoyo alguno, fueron tratando de sobrevivir a una vida de duelo eterno.

Agrega que su madre fue despedida de la Universidad de Chile donde trabajaba de psicopedagoga y descendida en su grado académica, lo que sumó a todo su dolor, el tema de subsistencia económica.

Indica que su madre, debido al impacto traumático que le generó la pérdida de su padre, se sumergió en una depresión, por lo que no fue capaz de brindar un adecuado soporte maternal, quedando los cinco hermanos en un estado de mayor abandono, con las consecuencias que esto implica.

6.- Relato de doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti, nieta de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Indica que es la hija mayor de Katrina Sanguinetti y nieta mayor de Luis Sanguinetti; y que nació en el año 1975 con su madre recién llegada a Argentina.

Hace presente que su infancia fue marcada por la pérdida de su abuelo durante el Golpe de Estado en Chile y la represión política que afectó a su familia. Se crio con su abuela, viuda de Luis y con sus tíos que estudiaban en ese tiempo.



Describe cómo el silencio sobre la muerte de su abuelo y la inestabilidad económica generaron ansiedad y miedo en su vida. A pesar de las dificultades, destaca el fuerte lazo familiar y la capacidad de la familia para apoyarse mutuamente.

7.- Relato de doña Zsu Ramírez Sanguinetti, nieta de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hija de Katrina Sanguinetti Tachibana y nació el año 1978.

Fue diagnosticada con un trastorno de ansiedad y trastorno adaptativo, que podría haberse generado durante su gestación, influenciados por el entorno político y las experiencias traumáticas de sus familiares. Comenta que recibió tratamiento psiquiátrico y psicoterapia para enfrentar estos desafíos y lograr una mayor comprensión de su historia familiar, lo que le permitió superar visiones polarizadas y adoptar una perspectiva más matizada en su vida.

8.- Relato de doña Nicole Pastene Sanguinetti, nieta de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hija de Maritza Sanguinetti Tachibana, y nació el año 1986.

Indica que numerosos estudios psicológicos han revelado que las emociones profundas que experimenta una persona pueden ser traspasadas, incluso, genéticamente a su descendencia. Así señala que le pasó a ella, dado que el dolor que guarda lo trae desde antes de su existencia.

9.- Relato de doña Michella Chargoña Sanguinetti, nieta de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hija de doña Jocelyne Sanguinetti Tachibana.

Expone cómo la trágica muerte de su abuelo ha impactado a toda la familia. Lamenta el hecho de no haber podido conocer y compartir con su abuelo, quien habría sido un referente importante en su vida afectiva.





10.- Relato de doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal, nieta de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hija de Hajime Sanguinetti Tachibana.

Lamenta no haber conocido a su abuelo debido a su trágica muerte durante el Golpe Militar en Chile. Describe a su abuelo como un hombre ejemplar, pero su ausencia ha dejado un vacío en su vida y en la de su familia. Comenta que su padre, Hajime, evita hablar del tema y sufre internamente, lo que ha afectado la comunicación y relación con ella. Relata que en su adultez, lucha con la inseguridad y la timidez, lo que ha impactado sus relaciones personales y su autoestima. A pesar de estos desafíos, señala que intenta reconstruir su historia imaginando cómo habría sido su vida si su abuelo estuviera presente, pero el dolor de su pérdida continúa marcando su vida de manera negativa.

11.- Relato de doña Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal, nieta de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hija de Hajime Sanguinetti Tachibana.

Manifiesta que recuerda a su padre como una figura de protección y seguridad durante su infancia. Sin embargo, a los 9 años, presenció un cambio drástico en su padre, quien se mostraba devastado y angustiado. Indica que junto a sus tíos, observó conversaciones secretas y momentos de llanto desconsolado. Indica que descubrió que su padre estaba leyendo un libro que relataba las torturas sufridas por su abuelo en el buque Lebu. Esta revelación la impactó profundamente, experimentando su primera crisis de angustia y fue diagnosticada con lipotimia.

Expresa que la muerte de su abuelo, aunque ocurrió antes de su nacimiento, dejó una marca indeleble en su vida, generando una profunda tristeza por no haber podido conocerlo y disfrutar de su



presencia en eventos importantes como su boda y el nacimiento de sus hijos.

12.- Relato de don Diego Eduardo Sanguinetti Pizarro, nieto de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hijo de don Hajime Sanguinetti Tachibana.

Relata su experiencia de crecer sin conocer a su abuelo Luis debido a las injusticias de la dictadura.

Describe una relación distante y a veces difícil con su padre, marcada por la ausencia en los primeros años de vida -lo conoció en persona a los seis años- y una posterior relación estricta y distante. Comenta que a medida que crecía, intentaba acercarse a su padre, pero las diferencias entre ellos generaban tensiones y discusiones, a pesar de vivir juntos durante años, la relación permanecía fría y distante emocionalmente. Menciona que la falta de conexión con su familia paterna y la ausencia de su abuelo lo han llevado a tener dificultades para expresar sus emociones y establecer relaciones cercanas con su familia, tanto paterna como materna. Hace presente el dolor de no conocer a su abuelo y la crueldad de las circunstancias que le impidieron formar parte de su vida familiar.

13.- Relato de don Gianluca Sanguinetti Vivar, nieto de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hijo de Hajime Sanguinetti Tachibana.

Expone que conoce a su abuelo a través de las historias contadas por su padre. Aunque su padre lo describe como un hombre cariñoso con los niños y estricto en cuanto a tareas y notas, lamenta el hecho de no haber tenido la oportunidad de interactuar con él, aprender de él y disfrutar de su compañía. Añade que siente que se ha perdido de mucho al no haber conocido a su abuelo y considera que habría sido una experiencia bonita tenerlo en su vida.



14.- Relato de don Carlo Filippo Pastene Sanguinetti, nieto de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

Es hijo de Maritza Sanguinetti Tachibana.

Menciona la importancia del rol del abuelo en el desarrollo afectivo y emocional de un nieto, además de ser una figura clave en su vida social y familiar. Expresa la sensación de pérdida tanto humana como afectiva al no haber conocido a su abuelo debido a los eventos traumáticos del pasado. Indica que vivir sin la presencia de un abuelo ha generado una sensación de ausencia en su infancia y ha dejado preguntas sobre cómo habría sido su vida si su abuelo estuviera vivo.

**EN CUANTO AL DERECHO:**

Afirma que los hechos relatados que afectaron a la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de conformidad a lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, confirmado por las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946 y de 11 de diciembre del mismo año; concepto que se ha desarrollado y actualizado con la adopción del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, y que fue aprobado en 1998.

Expresa que la privación de libertad y los tormentos aplicados a la víctima don Luis Sanguinetti Fuenzalida son actos criminales que se llevaron a cabo en un contexto de ataque generalizado y sistemático dirigido en contra de la población civil, efectuado por agentes del Estado y por civiles que actuaron con la anuencia de los primeros, y siempre con conocimiento de dicho ataque.

Respecto a la responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República de 1980, refiere que el artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República de 1980, señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el



Estado, podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto, continúa, consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando éstos, por su actividad, provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

Refiere también a los artículos 1 inciso 4°, 6 y 7, todos de la Constitución Política de la República, que establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Acerca de la responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, a la luz del derecho internacional, comenta que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile –por cierto– forma parte.

Indica además que el complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de Derechos Humanos, los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

De allí, continúa, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma



obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente.

Afirma la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, toda vez que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado.

A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, en razón que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del Derecho Público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Respecto a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, afirma que la materia de que trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas-, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino que, además, la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos de esta naturaleza.

A modo ilustrativo, menciona algunos de los fallos en que nuestra Excelentísima Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de



lesa humanidad, y de los crímenes de derecho internacional en general.

En cuanto al daño provocado y el monto de la indemnización, indica que este caso, existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que los demandantes como hijas e hijos, nietas y nietos sobrevivientes de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida. Afirma que la dolorosa situación a la que ellas y ellos se han visto enfrentadas y enfrentados, respectivamente, configura un claro daño moral que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado, mediante la indemnización.

Entiende por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

Respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, afirma que, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio, en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.

Afirma que existe un daño de carácter transgeneracional que se ha expresado y afectado especialmente a las nietas y nietos de la víctima don Luis Sanguinetti Fuenzalida.

Respecto de este daño transgeneracional, señala que este constituye aquel daño o trauma psicosocial que se trasmite de los hijos a los nietos, ya sea por vivir una situación represiva o por la pérdida de un familiar, por ejemplo. Al ser detenido el abuelo, se produce un quiebre en la familia, el cual se va transmitiendo mediante diversas



conductas hacia las nietas y los nietos, generando un impacto directo en la historia familiar.

Finaliza solicitando se sirva tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado al pago de la suma total de \$ 2.350.000.000 (dos mil trescientos cincuenta millones de pesos chilenos), esto es, \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) para doña Katrina Bárbara Sanguinetti Tachibana; \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) para don Hajime Giorgio Sanguinetti Tachibana; \$ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) para don Gino Américo Sanguinetti Tachibana; \$ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) para doña Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana y \$ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) para doña Jocelyne Roxana Sanguinetti Tachibana; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para doña Zsu Ramírez Sanguinetti; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para doña Nicole Pastene Sanguinetti; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para don Carlo Filippo Pastene Sanguinetti; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para don Aldo Bautista Pastene Sanguinetti; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para doña Michella Chargoña Sanguinetti; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para doña Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para don Diego Eduardo Sanguinetti Pizarro; \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para don Gianluca Sanguinetti Vivar y \$ 100.000.000 (cien millones de pesos chilenos) para doña Cuzia



Alegra Sanguinetti Paine, por concepto de aquellos daños morales que han padecido las personas demandantes, con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado en perjuicio de su padre y abuelo, según corresponda, don Luis Sanguinetti Fuenzalida, o bien, en subsidio, a la suma de dinero que el tribunal en justicia y prudencialmente considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, I.P.C., desde la fecha de interposición de la demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

**Con fecha 14 de febrero de 2022, se notificó la demanda al Fisco de Chile.**

**Con fecha 6 de mayo de 2022, la parte demandada contesta la demanda,** solicitando su rechazo o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Opone las siguientes excepciones o defensas:

**I. Controversia de los hechos respecto de los nietos que demandan por daño moral propio.**

Expone que los actores Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti, Zsu Ramirez Sanguinetti, Nicole Pastene Sanguinetti, Carlo Filippo Pastene Sanguinetti, Aldo Bautista Pastene Sanguinetti, Michella Aliaga Sanguinetti, Carla Francisca Sanguinetti Carvajal, Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal, Diego Eduardo Sanguinetti Pizarro, Gianluca Sanguinetti Vivar y Cuzia Allegra Sanguinetti Paine, en sus calidades de nietos de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, víctima reconocida en Informe Rettig, comparecen a título personal, invocando un daño moral propio en su calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin que hubieren sido reconocidos por el Estado como víctimas por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXDXDQVXW



Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, ni en alguno de los otros informes oficiales al efecto. Esta parte controvierte los presupuestos de su demanda debiendo, en consecuencia, acreditarse por los aludidos actores, la totalidad de aquellos presupuestos en tanto necesarios para que proceda una indemnización de perjuicios a su respecto, no siendo suficiente el invocar solo la relación de parentesco con la víctima directa, a quien, según sus propios dichos, no conocieron.

## **II. Falta de legitimación activa de los actores que interponen demanda en calidad de nietos de la víctima.**

Indica que consta que los actores precedentemente individualizados, concurren a estrados, conforme indican en su demanda, en calidad de víctimas por repercusión o rebote, por la muerte de su abuelo. Sin embargo, y tal como ya fue advertido, dichos actores no figuran como víctimas reconocidas por el Estado, en ninguno de los informes oficiales emitidos para tales efectos. Tampoco siquiera, conocieron a la víctima don Luis Sanguinetti. Entonces, no teniendo la calidad de víctimas, carecen de legitimación activa para interponer la presente demanda. A mayor abundamiento, los padres de estos actores en sus calidades de hijos de la víctima, don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, sí concurren como legitimados activos válidos para demandar, pretendiendo una indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la muerte de su padre.

Indica que el daño, para ser indemnizado, debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación. Si bien el daño reflejo o por repercusión, se puede considerar un daño personal, este sólo puede ser indemnizado cuando esté dentro de ciertos límites, cuyo no es el caso, tratándose de los nietos, no solo por la lejanía del parentesco, sino que también, por no haber existido al momento en que ocurrieron los hechos.



Entonces, concluye, que mal pueden alegar un daño moral, como el demandado en estos autos. Así, por ejemplo, todos los nietos nacidos con posterioridad y que no conocieron a su abuelo fallecido en circunstancias trágicas, tendrían acción de indemnización de perjuicios, y ello no es así.

Sostiene que extender el daño moral por repercusión a extremos tales como los descritos en esta demanda, ocurridos por lo demás hace décadas, en que los nietos ni siquiera habían nacido y donde los hijos de la víctima directa comparecen en estos mismos autos demandando la indemnización que le pudiese corresponder, se genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil y, por ende, la acción que pretende ese daño debe ser rechazada.

**III. En subsidio, improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por los nietos, por limitación de la justicia transicional, además de haber sido reparadas en la forma que expresará.**

Manifiesta que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, la Ley 19.992 ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, pues mediante ella se hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de prisión política y tortura mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.



Hace presente que a diciembre del año 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400, por concepto de reparaciones.

Indica que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directamente por el daño.

**IV. Sin perjuicio de lo anterior, los demandantes han obtenido igualmente otras formas de reparación satisfactiva.**

Expone que el hecho que los actores señalados no haya tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal-, no significa que no haya obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de éste.

Señala que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto puramente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Sostiene que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante



transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Manifiesta que mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de Justicia Transicional, que busca la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

**V. Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por los hijos de don Luis Sanguinetti Fuenzalida, por haber sido ya indemnizados y reparados integralmente todos los demandantes:**

Opone la excepción de reparación integral o de pago de las sumas que se demandan en autos, atendidas las reparaciones ya otorgadas a los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Señala que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Así las cosas, continúa, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

**VI.- Excepción de prescripción extintiva:**

Asimismo, el demandado opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXDXDQVXW

artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indica que, según el relato de los demandantes, los hechos que dan origen a la demanda civil se produjeron el 14 de septiembre de 1973. Sostiene que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 14 de abril de 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.

Agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público, estando consagrada en las normas del Título XLII del Código Civil, y en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho



privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Indica que debe considerarse que, en la especie, se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. Para ello, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción patrimonial, destaca que ni la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad," ni los "Convenios de Ginebra de 1949," ni la "Resolución N° 3.074 de 1973," ni la "Convención Americana de Derechos Humanos" establecen la imprescriptibilidad para acciones civiles indemnizatorias.

Afirma el demandado que, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en



los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

#### **VII. En cuanto al daño e indemnización reclamada:**

En primer lugar, rechaza categóricamente la indemnización demandada por todos los actores que accionan en sus calidades de nietos, por todo lo alegado respecto de ellos en esta presentación.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Con relación al daño moral reclamado, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Indica que, en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para dejarla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede sostenerse que llegue a compensar en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se elimina por obra de la indemnización; la pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Por ende, señala que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos monetarios, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción reparatoria, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de



dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Respecto a los reajustes e intereses demandados, manifiesta que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

En cuanto a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Reitera que en el hipotético caso de que se acoja la acción de autos y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos, y, en definitiva, conforme a las excepciones y defensas opuestas, rechazar la demanda en todas sus partes, sin perjuicio de las alegaciones subsidiarias. En subsidio, fijar el monto de indemnización, teniendo presente todo lo expuesto y los beneficios patrimoniales y extra patrimoniales ya percibidos por los demandantes a través de las leyes de reparación.

**Con fecha 26 de mayo de 2022, la parte demandante evacúa el trámite de réplica.**

I. Sobre la negación de los hechos del caso.

Señala que si bien el Fisco de Chile admite como cosa cierta e irrefutable la detención, torturas y muerte en cautiverio de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, con todo, sí cuestiona la veracidad del sufrimiento moral que una parte de los actores (sólo los nietos de la víctima directa) relatan en su demanda.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXDXDQVXW



Añade que el yerro del argumento fiscal es doble: primero, asume que las torturas y la muerte en cautiverio son algo inocuo para la familia extendida de la víctima (ésta no sufriría daño alguno); y, segundo, parece negar que al interior de una familia existan vínculos de afecto y lazos sentimentales entre sus miembros, pues, cuando uno sufre los demás actuarían con indiferencia e indolencia.

II. Sobre la falta de legitimación activa de los actores (los nietos de la víctima directa).

Sostiene que los nietos fueron criados en el seno de una familia quebrada por la violencia estatal (vale decir: siendo personas cuyas vidas están marcadas -y desde temprano- por el dolor), pues entonces, ellos bien pueden, en función de la garantía constitucional sobre el libre acceso de las personas a la justicia (artículo 19 N°3 de la Norma Fundamental), traer su conflicto ante la judicatura competente para que ésta conozca su caso y decida lo que en derecho corresponda. Por otro lado, comenta que el error de la defensa fiscal se halla también en transformar los silencios legales en prohibiciones jurídicas, esto es, allí donde las leyes de reparación sobre crímenes cometidos por el Estado nada dicen para casos como el de los nietos de la familia Sanguinetti, pues entonces cabría colegir que ellos tienen vedado el acceso a la justicia.

Concluye que se equivoca el Fisco de Chile si pretende demostrar que los nietos carecen -en sí mismos- de un derecho de demandar en juicio los daños sufridos a consecuencia de los apremios experimentados por su abuelo. Lo único que cabe concluir es que cualquier persona (y esto incluye a los nietos) tiene derecho a demandar el daño moral que dice haber sufrido, mas urge saber que, llegado el momento procesal oportuno, deberán aportarse los medios de prueba suficientes que demuestren la veracidad de lo afirmado (de lo contrario, y hasta sobra decirlo, las demandas serán rechazadas).

III. Sobre la limitación de la justicia transicional.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXCDQVXW

Señala que la demandada alega que los demandantes -tanto hijos como nietos del señor Sanguinetti Fuenzalida-, forman parte de un grupo de personas excluidas por la ley para que sus daños sean reparados de forma práctica o material, y argumenta que, a lo más, ellos sólo pueden aspirar a gozar de reparaciones morales o simbólicas (y ninguna más de aquellas que ya han sido gestionadas por el Estado a través de actos de memoria y garantías de no repetición de los crímenes perpetrados por sus agentes).

Argumenta que aquí la contradicción fiscal se hace evidente: se afirma y se niega al mismo tiempo y en el mismo sentido una misma cosa, a saber, que los miembros de la familia Sanguinetti no tienen y -a la vez- sí tienen, un derecho a ser reparados por la vivencia que marcó sus vidas: ellos no pueden aspirar a que por los hechos alegados en su demanda el Estado les repare de forma material, pero sí estarían facultados para recibir ciertos beneficios morales y simbólicos destinados a curar el mal sufrido. Concluye que el discurso fiscal debe ser desestimado, tanto por su incoherencia lógica, como por su total contradicción al sistema de reparaciones de daños para quienes sufrieron -sea por experiencia personal o por repercusión directa e inmediata- las desgracias de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 1973 a 1989.

Sostiene que dicho sistema de reparación -a nivel de legislación positiva nacional- se compone en base a dos principios elementales: primero, todas las personas tienen derecho de acceder a la jurisdicción para que ésta resuelva sus conflictos de relevancia jurídica (artículo 19 N° 3 de la Constitución Política); y, segundo, todo daño causado de forma ilegítima debe ser reparado por su autor (artículo 2329 del Código Civil).

IV. Sobre la prescripción de las acciones civiles en casos de crímenes de lesa humanidad.



Entiende que el artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica plasma un principio elemental: cuando el Estado ha sido hallado responsable de haber violado algún derecho humano, éste queda obligado a reparar las consecuencias del ilícito cometido y, además, al “pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. El error del Fisco de Chile suele ser que considera que dicha norma es una mera regla de adjudicación procedimental atinente de forma exclusiva (y excluyente) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha interpretación es incorrecta, pues lo cierto es que la norma citada no es más que la positivación de un principio universal (“todo daño debe ser reparado”). Se trata entonces de un precepto sustantivo (no una mera instrucción procedimental), cuyo contenido (la obligación de reparar) ha de entenderse en su sentido puro y simple (sin condiciones temporales): constatada la infracción del Estado a un derecho humano, la consecuencia jurídica es una sola: surge el deber de reparar (de forma general) y de indemnizar (de forma particular). Y esto -se insiste-, sin consideraciones al tiempo transcurrido entre el hecho ilícito y el fallo, o bien, entre el comienzo del litigio y el fallo.

V. Sobre el monto de lo pedido y la procedencia de los reajustes, intereses y costas.

Respecto de cifras señala las ya apuntadas en el libelo pretensor, pues toda demanda indemnizatoria exige incluir pretensiones concretas. Aunque señala que no hay dinero que supla el dolor experimentado por los hijos y nietos de un padre de familia y de un abuelo que sufrió la tortura y perdió la vida hallándose en manos de sus captores.

Por último, sobre los reajustes, intereses y costas, reitera lo expuesto en el texto de la demanda: es la judicatura civil la que determina la cuantía de las reparaciones, por lo que procede que éstas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia (éste es el momento procesal en que queda fijada la



pretensión). Y lo mismo aplica, por cierto, a los intereses. En cuanto a las costas de la causa su parte confía que el tribunal aplicará, llegado el momento oportuno de hacerlo, las normas legales que regulan este asunto.

**Con fecha 10 de junio de 2022, la parte demandada evacúa el trámite de dúplica,** reiterando sus defensas expresadas en el escrito de contestación.

Reitera que el demandante insiste en que los nietos del causante, habrían experimentado un daño moral por la detención y tortura de que habría sido víctima su abuelo don Luis Sanguinetti Fuenzalida, sin hacerse cargo del hecho, que ellos ni siquiera habían nacido a la fecha de los acontecimientos en que se funda la demanda, que tampoco vivieron con su abuelo, y que el daño moral es esencialmente personal y no transmisible a los herederos.

En este contexto, indica que el daño, para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación. Si bien el daño reflejo o por repercusión, se puede considerar un daño personal, este sólo puede ser indemnizado cuando esté dentro de ciertos límites, cuyo no es el caso, tratándose de los nietos, no solo por la lejanía del parentesco, sino que también, por no haber existido al momento en que ocurrieron los hechos.

**Con fecha 8 de noviembre de 2022, se recibió la causa a prueba.**

**Con fecha 3 de noviembre de 2023, se citó a las partes para oír sentencia.**

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que doña Katrina Bárbara Sanguinetti Tachibana, don Hajime Giorgio Sanguinetti Tachibana, don Gino Américo Sanguinetti Tachibana, doña Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXDXDQVXW

doña Jocelyne Roxana Sanguinetti Tachibana, doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti, doña Zsu Ramírez Sanguinetti, doña Nicole Pastene Sanguinetti, don Carlo Filippo Pastene Sanguinetti, don Aldo Bautista Pastene Sanguinetti, doña Michella Chargoña Sanguinetti, doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal, doña Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal, don Diego Eduardo Sanguinetti Pizzaro, don Gianluca Sanguinetti Vivar y doña Cuzia Alegria Sanguinetti Paine interpusieron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Que la parte demandada contestó el libelo, pidiendo su rechazo, al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.

**TERCERO:** Que se fijaron los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, respecto de los cuales debía recaer la prueba:

1.- Efectividad de los hechos descritos en el libelo pretensor en relación a quienes comparecen en calidad de nietos de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

2.- Efectividad que los demandantes han sufrido los perjuicios descritos en el libelo pretensor. En la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios.

3.- En su caso, efectividad de que dichos perjuicios son imputables al actuar de la demandada.

4.- Relación de causalidad entre el actuar de la demandada y los perjuicios demandados.

5.- Efectividad que los demandantes fueron reparados por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactoria.

**CUARTO:** Que a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó los siguientes documentos en autos:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXXDQVXW

En el folio 1:

1.- Certificado de nacimiento de doña Katrina Bárbara Sanguinetti Tachibana.

2.- Certificado de nacimiento de don Hajime Giorgio Sanguinetti Tachibana.

3.- Certificado de nacimiento de don Gino Américo Sanguinetti Tachibana.

4.- Certificado de nacimiento de doña Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana.

5.- Certificado de nacimiento de doña Jocelyne Roxana Sanguinetti Tachibana.

6.- Certificado de nacimiento de doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti.

7.- Certificado de nacimiento de doña Zsu Ramírez Sanguinetti.

8.- Certificado de nacimiento de doña Nicole Pastene Sanguinetti.

9.- Certificado de nacimiento de doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal.

10.- Certificado de nacimiento de don Aldo Bautista Pastene Sanguinetti.

11.- Certificado de nacimiento de doña Carlo Filippo Pastene Sanguinetti.

12.- Partida de nacimiento de doña Michella Chargoña Sanguinetti, emanada de la Dirección General del Registro del Estado Civil de la República Oriental del Uruguay, con la apostilla de La Haya.

13.- Certificado de nacimiento de doña Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal.



14.- Certificado de nacimiento de don Diego Eduardo Sanguinetti Carvajal.

15.- Certificado de nacimiento de don Gianluca Sanguinetti Vivar.

16.- Certificado de nacimiento de doña Cuzia Alegra Sanguinetti Paine.

17.- Certificado de defunción de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

18.- Certificado suscrito por la señora Subsecretaria de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual se hace constar la calidad de víctima de violaciones a sus derechos humanos de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, según el reconocimiento expreso que realizó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

19.- Copia simple de la página 294 del Informe elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

20.- Copia simple del procesamiento dictado el 19 de mayo de 2014, en causa rol Nº 144.064-2011, por el entonces Señor Ministro en Visita Extraordinaria don Jaime Arancibia Pinto, de la Il. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En el folio 12:

21.- Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, CDH-2-2017.

**QUINTO:** Que la parte demandante, además, ofreció prueba testimonial, prestando declaración doña Erika Inés Jara Pizarro, don Carlos Patricio Rozas Balbontin y doña Antonieta Isbhel Barrientos Bahamondes, en la audiencia agregada a folio 33; mientras que la declaración de don Juan Florencio Esteban Letelier, don Arnaldo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXXDQVXW

Leopoldo Torres Ramos y doña Nora Leonor Azúa Torres, consta en audiencia allegada a folio 37.

**SEXTO:** Que por su parte, mediante resoluciones de folio 41, 44 y 49, se decretó como medida para mejor resolver, la agregación de documentos, consistentes en los informes psicológicos de doña Michella Chargoña Sanguinetti, doña Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal, doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti, doña Cuzia Sanguinetti Paine, doña Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana, doña Katrina Bárbara Sanguinetti Tachibana, don Gino Américo Sanguinetti Tachibana, don Carlo Pastene Sanguinetti, doña Jocelyne Roxana Sanguinetti Tachibana, doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal, don Aldo Bautista Pastene Sanguinetti, doña Nicole Pastene Sanguinetti, doña Zsu Ramírez Sanguinetti, don Gianluca Sanguinetti Vivar, don Diego Eduardo Sanguinetti Pizarro, y don Hajime Giorgio Sanguinetti Tachibana, acompañados por la demandante a folio 40, 42, 43, 45, 46, 47 y 48.

**SÉPTIMO:** Que, por su parte, la demandada solicitó oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS), a fin de que informara todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que han obtenido los demandantes, recibándose respuesta de tal institución el 5 de julio de 2022, agregada a folio 16.

**OCTAVO:** Que son hechos pacíficos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1.- Que don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, a los 38 años de edad, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en dependencias de la Aduanas de Valparaíso, siendo sometido a diversas torturas que lo dejaron en deplorables condiciones físicas y psicológicas.

2.- Que don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida falleció el día 14 de septiembre de 1973, teniendo su muerte como antecedente directo e inmediato el trato cruel y degradante a que fue sometido.





3.- Que don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida fue reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

4.- Que los demandantes doña Katrina Bárbara, don Hajime Giorgio, don Gino Américo, doña Maritza Eleonora y doña Jocelyne Roxana, todos de apellido Sanguinetti Tachibana, son hijos de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

5.- Que los demandantes doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti, doña Zsu Ramírez Sanguinetti, doña Nicole Pastene Sanguinetti, don Carlo Filippo Pastene Sanguinetti, don Aldo Bautista Pastene Sanguinetti, doña Michella Chargoña Sanguinetti, doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal, doña Antonella Francisca Sanguinetti Carvajal, don Diego Eduardo Sanguinetti Pizzaro, don Gianluca Sanguinetti Vivar y doña Cuzia Alegria Sanguinetti Paine, son nietos de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

**NOVENO:** Que la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios por daño moral dirigida en contra del Fisco de Chile, fundado en la calidad de hijos y nietos de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, víctima de violación de Derechos Humanos durante el régimen militar.

En consecuencia, junto con analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión de los actores, es procedente referirse previamente a las defensas esgrimidas por el demandado, ya indicadas en lo expositivo del fallo.

I. Respecto al daño moral de los nietos de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida:

**DÉCIMO:** Que el Fisco de Chile indica que los nietos de la víctima don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida comparecen a título personal, invocando un daño moral propio en su calidad de víctima de violaciones a los Derechos Humanos, sin que hubieren sido



reconocidos por el Estado como víctimas por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, ni en alguno de los otros informes oficiales al efecto, debiendo acreditarse por ellos la totalidad de los presupuestos de la indemnización de perjuicios, no siendo suficiente el invocar la relación de parentesco con la víctima directa, a quien, según sus propios dichos, no conocieron.

**UNDÉCIMO:** Que la parte demandante, al evacuar la réplica, afirma que las torturas y la muerte en cautiverio afectan a la familia extendida de la víctima, dado que existen vínculos de afecto y lazos sentimentales entre sus miembros.

Que, así las cosas, el daño moral que alegan este grupo de demandantes y que piden les sea indemnizado, consiste en haber sido criados dentro de una familia quebrada por esta vivencia traumática, como asimismo habérseles privado de conocer y crecer junto a su abuelo.

**DUODÉCIMO:** Que, al respecto, y sin perjuicio de partir de la premisa que la violación de los derechos básicos a uno de los integrantes de una familia -que en este caso desembocó en la muerte de aquél-, necesariamente será un dolor que acompañará la historia familiar y afectará, en mayor o menor medida, a cada uno de sus miembros, resulta necesario esclarecer si el daño invocado por los nietos de don Luis Sanguinetti Fuenzalida, reúne los requisitos para ser reparado por la demandada.

**DÉCIMO TERCERO:** Que el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

**DÉCIMO CUARTO:** Que para que el perjuicio pueda ser resarcido, debe reunir ciertas características básicas, entre las cuales, cabe destacar para el caso sub lite, su certidumbre y relación directa



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXDXDQVXW

con el hecho ilícito. Así las cosas, no procedería la indemnización en circunstancias que el daño fuera incierto e indirecto.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, bajo este supuesto, resulta necesario para configurar un daño indemnizable que los nietos demandantes hayan visto afectados o truncados los vínculos de afecto o convivencia con su abuelo don Luis Sanguinetti Fuenzalida.

Sin embargo, tal dolor o pérdida es imposible de configurar en este caso, dado que dichos actores, al momento de la tortura y muerte de su abuelo, no habían ni siquiera nacido. Aún más, sus padres -actores hijos de la víctima- tenían entre 18 y 10 años de edad en esa época.

Así, el hecho de nacer e insertarse en un grupo familiar dañado con anterioridad, o añorar una vida acompañada por un abuelo, no permite configurar un daño directo, cierto y significativo que amerite su resarcimiento.

No es posible perder de vista en esta etapa, que las acciones indemnizatorias por daño moral -y especialmente aquellas derivadas de violación a los Derechos Humanos-, tienen por objeto otorgar a los actores algún tipo de satisfacción o reparación frente a un dolor inconmensurable que el Estado debe cumplir, como ocurre en centenares de acciones que se han deducido ante los tribunales civiles por cónyuges, hijos y nietos de las víctimas, pero siempre en el entendido de configurarse una afectación trascendente en las relaciones de vida con ellos, y que tienen un impacto directo y propio en sus emociones. De allí, que el daño esgrimido por los nietos, que ni siquiera conocieron a su abuelo don Luis Sanguinetti Fuenzalida, pierde sustento para una reparación, razón que conducirá al rechazo de la acción por ellos intentada.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, habiéndose acogido la primera defensa deducida por el Fisco sobre la acción interpuesta por los nietos de la



víctima don Luis Sanguinetti Fuenzalida, se omitirá pronunciamiento sobre las restantes atinentes a dichos demandantes.

Que, en consecuencia, el razonamiento que se realizará a continuación, solo se aplica a los actores hijos de la víctima don Luis Sanguinetti Fuenzalida.

II. En cuanto a la excepción de reparación integral de los hijos :

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que en cuanto a la excepción de reparación integral o reparación satisfactiva, alega la demandada que los actores ya se encontrarían indemnizados de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que al haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que conforme a lo consignado en el oficio ORD: DSGT N°4792-7720, de 1 de julio de 2022, suscrito por el Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, agregado a folio 17, consta que los demandantes doña Katrina Bárbara, don Hajime Giorgio, don Gino Américo, doña Maritza Eleonora y doña Joselyne Roxana, todos de apellidos Sanguinetti Tachibana, han recibido por una sola vez, el Bono de Reparación Ley N° 19.980, por \$10.000.000 cada uno, en su calidad de hijos del causante Ley Rettig don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

**DÉCIMO NOVENO:** Que las transferencias de dinero realizadas a los demandantes individualizados en el considerando anterior, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no conllevan –necesariamente- la reparación íntegra de los daños padecidos por los actores, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXXDQVXW

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Que, además, los beneficios otorgados por la Ley N°19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

Que en el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”* (Sentencia Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 12.636-2018).



Conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

### III. Respecto a la excepción de prescripción:

**VIGÉSIMO:** Que respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se sujeta a las normas internas que rigen en el ámbito patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometiéndose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Tal controversia –y la postura que se adopte- no resulta baladí. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que el actor pudo ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que para zanjar tal problemática, es necesario considerar que si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre



la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

Ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción*



*contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, ...” (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N°12.636-2018).*

Con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta magistrada se inclina por la postura de una imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que doña Katrina Bárbara, don Hajime Giorgio, don Gino Américo, doña Maritza Eleonora y doña Joselyne Roxana, todos de apellidos Sanguinetti Tachibana, demandan indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la detención y torturas de que fue objeto su padre don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, hechos que desencadenaron su muerte, por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada.

Luego, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegados por los actores.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por los actores -sino únicamente la procedencia o cuantía de la suma pedida a su respecto-, la parte demandante rindió prueba testifical, deponentes cuyas declaraciones convergen en el quebrantamiento de la familia Sanguinetti tras el fallecimiento de su padre, y los problemas





sicológicos que afectaron a los hijos, como depresión y distanciamiento social.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral reclamado, los demandantes, además, rindieron prueba documental para acreditar su detrimento, destacándose en ese sentido los informes psicológicos de daños de cada uno de ellos.

Respecto de don Gino Américo, don Hajime Giorgio y doña Jocelyne Roxana, todos de apellidos Sanguinetti Tachibana, el psicólogo Juan Antonio Bustamante Donoso, indica que padecen de trastorno por estrés postraumático de curso crónico; y que las secuelas de daño en el ámbito emocional, psicológico y social resultan concordantes con los hechos relatados y las consecuencias de largo plazo de la experiencia de detención, desaparición, tortura, ejecución y hallazgo de su padre don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida.

Que respecto a doña Maritza Eleonora Sanguinetti Tachibana, el mismo profesional indica que padece de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor y trastorno por estrés postraumático de curso crónico, concordante con los hechos relatados y las consecuencias de largo plazo de la prisión política y tortura, así como del daño en ámbitos laborales y familiares.

En cuanto a doña Katrina Barbara Sanguinetti Tachibana, el médico psiquiatra don Carlos Graf Fernández, señala que la demandante sufre de trastorno post traumático crónico como consecuencia del fallecimiento de su padre. Además, presenta trastorno ansioso con síntomas psicósomáticos activos desde 2007 a la actualidad, los cuales están siendo controlados y tratados.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que de los informes psicológicos indicados es dable dar por acreditado que producto de la prisión política, torturas y muerte sufrida por don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, la vida de sus hijos menores de edad, experimentó un



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXDXDQVXW

profundo cambio a nivel personal, familiar y social. Así, se vieron privados abruptamente a seguir creciendo junto a su padre, obligándolos a asumir diversas labores y funciones no acordes a su temprana edad, al mismo tiempo que su familia se iba desmembrando.

Dicha experiencia traumática, sigue actualmente presente a través de diversos daños psicológicos evidentes y crónicos que persisten en cada uno de ellos.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que correspondiendo avaluar prudencialmente el daño moral padecido por doña Katrina Bárbara, don Hajime Giorgio, don Gino Américo, doña Maritza Eleonora y doña Joselyne Roxana, todos de apellidos Sanguinetti Tachibana, en su calidad de hijos de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, considerando además las repercusiones psicológicas y la reparación pecuniaria ya recibida por parte del Estado este será estimado en la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de ellos.

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado y devengará intereses corrientes desde que la demandada incurra en mora.

Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechaza la acción respecto de doña Cibeles Marjorie Aliaga Sanguinetti, doña Zsu Ramírez Sanguinetti, doña Nicole Pastene Sanguinetti, don Carlo Filippo Pastene Sanguinetti, don Aldo Bautista Pastene Sanguinetti, doña Michella Chargoña Sanguinetti, doña Carla Francisca Sanguinetti Carvajal, doña Antonella Francisca



Sanguinetti Carvajal, don Diego Eduardo Sanguinetti Pizzaro, don Gianluca Sanguinetti Vivar y doña Cuzia Alegra Sanguinetti Paine.

II.- Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida por el resto de los demandantes, condenándose al Fisco de Chile a pagar a don Katrina Bárbara, don Hajime Giorgio, don Gino Américo, doña Maritza Eleonora y doña Joselyne Roxana, todos de apellidos Sanguinetti Tachibana, en su calidad de hijos de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de ellos, a título de daño moral.

III.- Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado, y devengará intereses corrientes desde que la demandada se constituya en mora.

IV.- Que cada parte asumirá sus costas.

Notifíquese, regístrese y archívese.

**Rol C-1488-2022**

Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, Juez Titular del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago.

En Santiago, a dieciocho de Julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QSCXXDQVXW